

Punta Arenas, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece José Miguel Navarrete Rojas, Abogado, Defensor Penal Público, por su representado don Álvaro Galvis Heredia, en autos RUC 2100082656-9 condenado como autor de infracción a art 4 de la ley 20.000, causa seguida ante el tribunal de garantía de Puerto Natales, quien interpone acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 22 de enero de 2025, dictada por la Jueza de Garantía doña Marianela Chacur Benítez, quien ordenó revocar la pena sustitutiva de remisión condicional con infracción a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 18.216 ordenando cumplir mayor pena privativa de libertad que la que corresponde legalmente.

Funda su recurso en que con fecha 29 de septiembre del año 2021 se condenó a su representado como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley 20.000, a sufrir la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, más accesorias legales; que dicha sentencia sustituye la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta (300 días) por la pena de remisión condicional contenida en el artículo 3° de la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, consistente en la discreta observación y asistencia del condenado ante Gendarmería de Chile de la ciudad de Puerto Natales, durante el plazo de un 1 año, es decir 12 meses; que el imputado según gendarmería cumplió 7 controles mensuales de la pena impuesta por 1 año.

Agrega que la pena sustitutiva fue revocada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 18.216 en la audiencia de fecha 22 de enero de 2025; que, una vez revocada la pena sustitutiva, se pidió en la audiencia que se diera estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la misma Ley en orden a contabilizar los 7 controles mensuales de la pena, faltándole en consecuencia 5 restantes para



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JLDBXSXVPN

efectos del cálculo proporcional y no 6 como lo indica infundada e ilegalmente gendarmería.

Indica que el tribunal ordenó ilegalmente no contabilizar íntegramente los 7 controles mensuales que cumplió el imputado, porque uno de ellos es sólo un trámite administrativo de voluntariedad de inicio de la pena sustitutiva de remisión condicional, decretando que la privación de libertad efectiva a cumplir fuera de 150 días y no de 125 días como legalmente corresponde según lo ordenado perentoriamente por el artículo 26 de la ley 18.216, imponiendo en definitiva 25 días de privación de libertad sin existir causa legal para justificarlos.

Sostiene que el artículo 26 de la ley 18.216 ordena obligatoriamente que la decisión del tribunal de dejar sin efecto la pena sustitutiva, sea como consecuencia de un incumplimiento o por aplicación de lo dispuesto en el artículo siguiente, someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva de forma proporcional a la duración de ambas; que la pena impuesta en la sentencia firme y ejecutoriada determinó que la pena sustitutiva fuera por el plazo de 1 año; que esa pena sustitutiva nunca fue sujeta a intensificación de la misma, sólo fue objeto de revocación conforme a la hipótesis del artículo 27 de la ley 18.216 en la audiencia de 22 de enero de 2025; que en el informe de gendarmería se reconoce expresamente que se cumplió con 7 firmas o controles de la pena sustitutiva en cuestión no explicando en dicho informe fundamentación alguna de por qué se agrega un mes más del plazo fijado en la sentencia.

Manifiesta que la resolución que niega aplicar el reconocimiento de los 7 controles de la pena sustitutiva no tiene fundamento alguno en ningún artículo de la ley 18.216; que, de esta manera la resolución impone una pena mayor de la fijada por la sentencia, con infracción de lo dispuesto en el artículo 26 ya transcrito, decretando ilegalmente 25 días de privación de libertad.



Termina solicitando se acoja el presente recurso y revocar la resolución decretando que la privación de libertad efectiva a cumplir por el amparado, por la revocación decretada de la remisión condicional, sea de 125 días.

Informando el recurso, compareció doña Marianela Chacur Benítez, Jueza de Garantía del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, quien señala que con fecha 22 de enero de 2025 se realiza audiencia de revisión de sentencia de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.216, en atención que con fecha 21 de enero de 2025 se recepcionó informe de CDP de Puerto Natales según el siguiente detalle: "Mediante el presente se informa a Usía el estado de cumplimiento del Sr. Álvaro Galvis. Señalando que el penado se presenta con fecha 18-10-2021 para realizar su primera firma y así dar inicio a su condena de Remisión Condicional por 1 año de firma mensual, cabe mencionar que el penado realiza 7 controles, la cual le restan por cumplir 6 firmas mensuales de su condena de 1 año. En Audiencia realizada el día 03-06-2022 se informa que se da por suspendida la pena sustitutiva en Causa Rit N°42-2021 hasta que se resuelva situación procesal en Causa Rit N°284-2022. Por lo tanto, su última firma fue el 11-04-2022 teniendo fecha de cumplimiento 18-10-2022".

Agrega que, previo debate, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 18.216 resolvió revocar la pena sustitutiva de remisión condicional, en cumplimiento de los requisitos legales, en consideración a sentencia condenatoria en causa Rit 284-2022 del Tribunal Oral en Lo Penal de Punta Arenas.

Expresa que, en atención al informe antes mencionado y su detalle, en especial que indica que restan 6 firmas mensuales, entendiendo esta sentenciadora que el CDP de Puerto Natales es quien administra el cumplimiento de las penas sustitutivas indicando que inicia el cumplimiento con fecha 18/10/2021 y termina el 18/10/2022, en atención asimismo al orden administrativo con fechas de firmas y cierres administrativos de cada mes que no son de resorte de este Tribunal sino de competencia y administración de



Gendarmería de Chile, el cual informa faltantes 6 firmas, esta Juez ordenó el cumplimiento de lo informado por dicha institución.

Sostiene que el artículo 26 de la Ley 18.216 utiliza la voz "proporcional a la duración de ambas" y no en forma matemática.

Estima que en caso alguno se resolvió en forma infundada, arbitraria e ilegalmente, con infracción legal, ya que se efectuó con bilateralidad de los intervinientes, resolviéndose ajustado a derecho, entendiéndose por la informante que, en caso de existir dudas de los cómputos, la defensa pudo haber solicitado oficio a CDP de Puerto Natales para que aclare los cómputos indicados, considerando que la resolución no se encontraba firme y ejecutoriada, sin que se ordenara el ingreso inmediato a su cumplimiento en caso de recurso de apelación que pudiera ejercer la defensa, existiendo plazo suficiente para que en forma urgente se oficiara para aclarar los periodos de firmas faltantes, lo cual no se solicitó por la defensa, sin perjuicio de presentar acción constitucional de amparo en contra de lo resuelto por esta Juez, existiendo duda sobre el cumplimiento de 25 días de su representado.

Señala, finalmente, que el amparado se encuentra con Decreto Administrativo de Expulsión, resolución exenta N°14054 de fecha 09/04/2024.

Encontrándose la causa en estado, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo es una acción constitucional que da origen a un procedimiento autónomo que tiene por objeto proteger la libertad personal y seguridad individual, cuando ella se encuentra amenazada, coartada o vulnerada en cualquier forma, en virtud de una orden ilegítima o de un acto arbitrario.

En consecuencia, puede interponerse de inmediato para instar por la libertad física o ambulatoria de una persona contra quien exista una orden de arraigo, detención o prisión



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JLDBXSVXVPN

emanada de autoridad que no tenga facultad para disponerla o que, teniendo esa facultad, la ha expedido fuera de los casos previstos en la ley o sin que haya mérito o antecedente que la justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no, por lo que el amparado o cualquier persona a su nombre podrán, si no se hubieren deducido los otros recursos legales, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los respectivos defectos.

Por último y acorde a lo expuesto, la procedencia de esta acción en contra de una resolución judicial es excepcional.

Conforme a lo anterior, los fundamentos de la acción constitucional deben ser analizados uno a uno para efectos de determinar si concurren en la especie y autorizan la protección constitucional que este arbitrio otorga.

SEGUNDO: Que, conforme a lo expuesto corresponde dilucidar si la decisión del Juzgado de Competencia Común de Puerto Natales, que ordenó revocar la pena sustitutiva de remisión condicional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 18.216 ordenando cumplir el saldo de la pena privativa de libertad de manera efectiva, es decir 6 firmas mensuales, de acuerdo a lo informado por el CDP de Gendarmería de Chile, constituye un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción interpuesta.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes, esta Corte estima que, es posible, concluir que los Sra. Jueza de Puerto Natales al decidir del modo que lo hizo, no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Al efecto, la vulneración que se reclama a favor del amparado, es decir, el error en el cómputo del saldo de la pena a cumplir, ha sido impuesta por una resolución judicial debidamente fundada, dictada por la autoridad judicial competente, dentro de un procedimiento legalmente tramitado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 18.216.

Del mismo modo corresponde descartar la arbitrariedad en la resolución objeto de la acción constitucional, ya que



aquella se encuentra debidamente motivada, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho, los que le otorgan razonabilidad; la decisión deriva del informe de Gendarmería que indica el saldo de pena que resta por cumplir al condenado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA** el recurso de amparo deducido por el abogado defensor penal José Miguel Navarrete Rojas en favor de Álvaro Galvis Heredia y en contra de la resolución de fecha 22 de enero de 2025, dictada por la Jueza de Garantía doña Marianela Chacur Benítez.

Comuníquese, regístrese y archívense.

Redacción de la Abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Rol Corte N°16-2025. AMPARO.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JLDBXSVXVPN

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Caroline Miriam Turner G., Fiscal Judicial Paula Andrea Stange K. y Abogado Integrante Sintia Alejandra Orellana Y. Punta Arenas, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

En Punta Arenas, a treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JLDBXSVXVPN